



Promoción de condiciones y términos laborales dignos

Los términos y condiciones bajo los cuales trabajan los jueces y funcionarios jurídicos son indicativos de su propensión a participar en actos de corrupción. Las judicaturas con sueldos bajos, capacitación y beneficios precarios, titularidad incierta o administración subestándar no suelen atraer y retener a candidatos de alta calidad. Incluso aunque se cuente con jueces y personal competentes, los términos y condiciones precarios pueden servir tanto de incentivo como oportunidad para recurrir a la corrupción. La seguridad del cargo de los jueces es un medio esencial para garantizar la independencia judicial, pero, las condiciones de servicio, en un sentido más amplio, deben brindar un ambiente profesional transparente, motivador y seguro para los agentes judiciales. El desarrollo de entornos laborales decentes es por tanto un medio clave para prevenir la corrupción judicial.

Índice

1. Sueldo judicial: ¿por qué es tan importante?
2. El papel del prestigio
3. Garantizar los recursos adecuados
4. Mejorar la administración de las cortes
5. Educación y capacitación apropiadas
6. Recomendaciones

1. Sueldo judicial: ¿por qué es tan importante?

Los sueldos judiciales que son demasiado bajos como para atraer o retener a empleados jurídicos competentes y que no les permiten a los jueces y al personal mantener a su familia en un ambiente seguro se traducen en una mayor susceptibilidad de los jueces hacia la corrupción. Puede que acepten sobornos cuando se los ofrezcan y, cuando no están sujetos a un control, tal vez extorsionen a usuarios vulnerables de la corte a fin de suplementar su ingreso. Un sueldo 'adecuado' significa un salario que garantice que los jueces y fiscales al menos no tengan 'necesidad' económica de tornarse a la corrupción, y que armonice con los sueldos de otros funcionarios públicos de alto nivel. Esta lógica debe extenderse a la entrega de pensiones judiciales justas, garantizando así la seguridad financiera de los jueces incluso hasta después de su jubilación.

Aunque queda claro que los jueces de instancias menores recibirán menos que los de instancias superiores, y que la escala salarial debe seguir una curva a modo de reflejar la experiencia, las diferencias de paga entre los jueces de mayor y menor nivel no deben ser tan extremas que empujen a los jueces de menor jerarquía a la corrupción. En algunos países, por ejemplo Nepal y Vietnam, los jueces de la Suprema Corte perciben de 10 a 20 veces el sueldo de los jueces menores, al igual que incentivos como autos y viviendas. Las diferencias extremas en los sueldos pueden potencialmente aislar a los jueces de menor nivel, separándolos del seno de la institución en la que sirven y, por tanto, reduciendo las probabilidades de que se adhieran a estándares profesionales.

2. El papel del prestigio

Pese a que el sueldo de los jueces no suele ser tan atractivo como el de los profesionales legales del sector privado, la seguridad del cargo judicial y el respeto que les merece la profesión deberían ser tales que compensen por la pérdida de ganancias. Por ejemplo, aunque el sueldo de un juez federal de una corte de distrito en Estados Unidos no es proporcional con lo que podría ganar un juez en la práctica privada, es más alto que el sueldo de la mayoría de empleados gubernamentales y el prestigio lo hace un puesto codiciado. La seguridad del cargo de los jueces es una forma eficaz de aumentar el prestigio de la cartera y es esencial a efectos de garantizar la independencia judicial. Comúnmente se cree que los periodos extensos de titularidad son necesarios a fin de limitar las posibles influencias sobre las decisiones judiciales: un mandato de 10 a 12 años, por ejemplo. Una corriente de pensamiento sobre la titularidad del cargo judicial postula que no debe admitirse la renovación ya que al final del mandato los jueces tienden a personalizar sus dictámenes y conducta en anticipación de la nominación.

3. Garantizar los recursos adecuados

Si bien es difícil encontrar un nexo causal entre la subremuneración y la corrupción judicial, un presupuesto exageradamente bajo siempre ejerce un impacto sobre la judicatura, obligándola a suplir sus necesidades con otras fuentes. El Estado tiene el deber de proveer los recursos necesarios a fin de que la judicatura pueda desempeñar sus funciones como procede. Ello incluye

Comúnmente se cree que los periodos extensos de titularidad son necesarios a fin de limitar las posibles influencias sobre las decisiones judiciales: un mandato de 10 a 12 años, por ejemplo. Una corriente de pensamiento sobre la titularidad del cargo judicial postula que no debe admitirse la renovación ya que al final del mandato los jueces tienden a personalizar sus dictámenes y conducta en anticipación de la nominación.

sueldos adecuados, pero también recursos para adquirir materiales legales, personal de apoyo apropiado y el mantenimiento de juzgado. La seguridad personal de los funcionarios jurídicos también es esencial, y el Estado es responsable de protegerlos contra la intimidación y la violencia, así como de proteger las salas y juzgados. La adjudicación de recursos dentro de una estructura judicial también puede ser una causa potencial de corrupción. Se debe abordar el tema de la capacidad institucional y de gestión financiera de la judicatura, la independencia presupuestaria y la transparencia a efectos de que los presupuestos disponibles sean utilizados de manera eficiente e imparcial.

4. Mejorar la administración de las cortes

La mala gestión de las cortes puede abrirle camino a la corrupción para trabar el proceso judicial. Aunque no existe un modelo único de gestión de cortes a prueba de corrupción, la creación de una estructura administrativa jerárquica encabezada por el administrador de la corte puede ayudar a mejorar la calidad del servicio judicial. Sin embargo, con tales estructuras el ejecutivo podría ejercer demasiado control sobre el funcionamiento rutinario de las cortes. Independientemente del modelo usado, es importante que los administradores de la corte mantengan un grado suficiente de independencia y transparencia.

Un sistema de gestión de casos que permita el monitoreo transparente de expedientes aumenta la eficacia de los procedimientos de la corte y garantiza que los casos sean escuchados con razonable eficiencia. Asimismo, ayuda a mejorar la rendición de cuentas del sistema de justicia. Los sistemas de gestión de casos computarizados y con software antimanipulación les facilitan a fiscales y litigantes la vigilancia de expedientes, supervisión de los casos, rastreo de archivos y el monitoreo de los requisitos de tiempo, eliminando así una potencial fuente de corrupción: el personal de la corte encargado del manejo de expedientes ya no podrá retener o extraviar archivos sólo para encontrarlos a cambio de soborno.

5. Educación y capacitación apropiadas

La educación y capacitación inadecuadas de jueces amenaza la integridad judicial al debilitar los estándares de profesionalismo y confianza en la judicatura como institución. La educación y capacitación adecuadas, por otro lado, ayudan a los jueces a adquirir y aumentar conocimientos pertinentes a sus posiciones, e inciden en el desarrollo de una cultura más amplia de conducta ética y altos estándares de profesionalismo. La capacitación también actúa como prestación no financiera para complementar los sueldos, ofreciendo la posibilidad del ascenso y un desincentivo a la corrupción.

Las iniciativas de reforma judicial a menudo incluyen la educación y la capacitación como parte de esfuerzos para combatir la corrupción judicial. La integridad y la ética son elementos importantes en tales programas, los cuales deben suponer la enseñanza detallada de un código de conducta, leyes de divulgación de activos, casos de corrupción judicial a gran escala y lecciones aprendidas. Pueden formar parte de un programa más amplio de reforma legal-judicial que busque no solamente ampliar el conocimiento, sino modificar la postura de jueces, abogados y funcionarios de alto rango resistentes al cambio.

La adjudicación de recursos dentro de una estructura judicial también puede ser una causa potencial de corrupción.

La creación de una estructura administrativa jerárquica encabezada por el administrador de la corte puede ayudar a mejorar la calidad del servicio judicial.

La capacitación también actúa como prestación no financiera para complementar los sueldos, ofreciendo la posibilidad del ascenso y un desincentivo a la corrupción.

Este documento de política es parte de una serie sobre cómo prevenir y responder a la corrupción en el sistema judicial. Se publicó en 2007 y estaba revisado en 2008.

Los cuatro temas abarcados en esta serie son: condiciones laborales dignas, nombramientos imparciales, rendición de cuentas y disciplina y transparencia. Los cuatro documentos de política se basan en el Informe Global de la Corrupción 2007 sobre la corrupción en sistemas judiciales.

Para mayor información sobre el IGC 2007, visite www.transparency.org/publications/gcr.

Detalles adicionales acerca del trabajo de TI sobre sistemas judiciales están disponibles en: www.transparency.org/global_priorities/other_thematic_issues/judiciary.

Para más información sobre este documento de política y otros de la serie, póngase en contacto con Craig Fagan, de la Secretaría de TI en: [pres\[at\]transparency.org](mailto:pres[at]transparency.org).

**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

Teléfono

+49-30-343820 -0

Fax

+49-30-347039 -12

Secretaría Internacional

Alt-Moabit 96

10559 Berlin

Germany

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

6. Recomendaciones claves

- 🌐 **La seguridad del cargo** de los jueces debe garantizarse por alrededor de 10 años y no se debe admitir renovaciones, ya que a finales del mandato los jueces tienden a personalizar sus fallos y conducta en anticipación de nominaciones.
- 🌐 **El sueldo de los jueces** debe ser proporcional a su posición, experiencia, rendimiento y desarrollo profesional durante el desempeño de su cargo, y se deben ofrecer pensiones justas al momento de jubilación.
- 🌐 El Estado debe proveer suficientes recursos para garantizar que los jueces estén **a salvo de la violencia y las amenazas** y que las salas de la corte estén seguras.
- 🌐 Las leyes deben **proteger los sueldos judiciales y las condiciones laborales** de modo que no puedan ser manipuladas por el ejecutivo y/o el legislativo con la intención de sancionar a los jueces independientes y/o recompensar a quienes constantemente fallen a favor del gobierno.
- 🌐 Los criterios objetivos para determinar la **asignación de jueces** a localidades determinadas deben garantizar que los jueces independientes o incorruptibles no sean sancionados enviándolos a jurisdicciones remotas. Los jueces no deben ser asignados a una corte en una localidad donde tengan amistad y vínculos cercanos con políticos.
- 🌐 **La asignación de casos** debe basarse en criterios claros y objetivos, ser administrada por jueces, evaluada periódicamente e incorporar salvaguardas contra la asignación de casos a jueces pro-gobierno o pro-negocio.
- 🌐 Los jueces deben disponer de fácil **acceso a la legislación, casos y procedimientos de la corte, y deben recibir capacitación** inicial antes o después de la nominación, así como capacitación continua a lo largo de sus carreras. Ello incluye entrenamiento en el análisis legal, la justificación de los fallos, la redacción de laudos y la gestión de casos, al igual que capacitación específica en ética y anticorrupción. 🌐

© 2009 Transparency International. Todos los derechos reservados.

Transparency International (TI) es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha global contra la corrupción en el mundo. A través de más de 90 capítulos en todo el mundo y una secretaría internacional en Berlín, Alemania, TI crea conciencia sobre los efectos nocivos de la corrupción. Para ello, trabaja con gobiernos, empresas y la sociedad civil para desarrollar e implementar medidas efectivas para combatirla. Para obtener más información, ingrese en: www.transparency.org

ISSN 1998-6432